

NOTA INFORMATIVA AGOSTO 2025

Observatorio de Seguridad Ciudadana

Universidad del Norte.

**El Homicidio como presión:
Las Fisuras de la Paz Total
en Barranquilla y el Atlántico**

Cuadernos de trabajo
División de Derecho,
Ciencia Política y
Relaciones Internacionales

Adscrito al **UNCaribe**
CENTRO DE PENSAMIENTO
Investigación y pedagogía para la construcción de paz

Vigilada Mineducación

Investigadores:
Janiel Melamed

El Observatorio de Seguridad Ciudadana es un centro intersectorial e insterinstitutional establecido con el propósito de recolectar y analizar información relacionada con los índices de violencia y criminalidad en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, de tal manera que pueda realizar desde la sociedad civil, un oportuno acompañamiento en la propuesta y evaluación de políticas públicas encaminadas a mitigar estas problemáticas.

Para citar este documento:
Melamed, J. (2025). **Fisuras de la paz total en Barranquilla y el Atlántico.** Observatorio de Seguridad Ciudadana. Universidad del Norte.

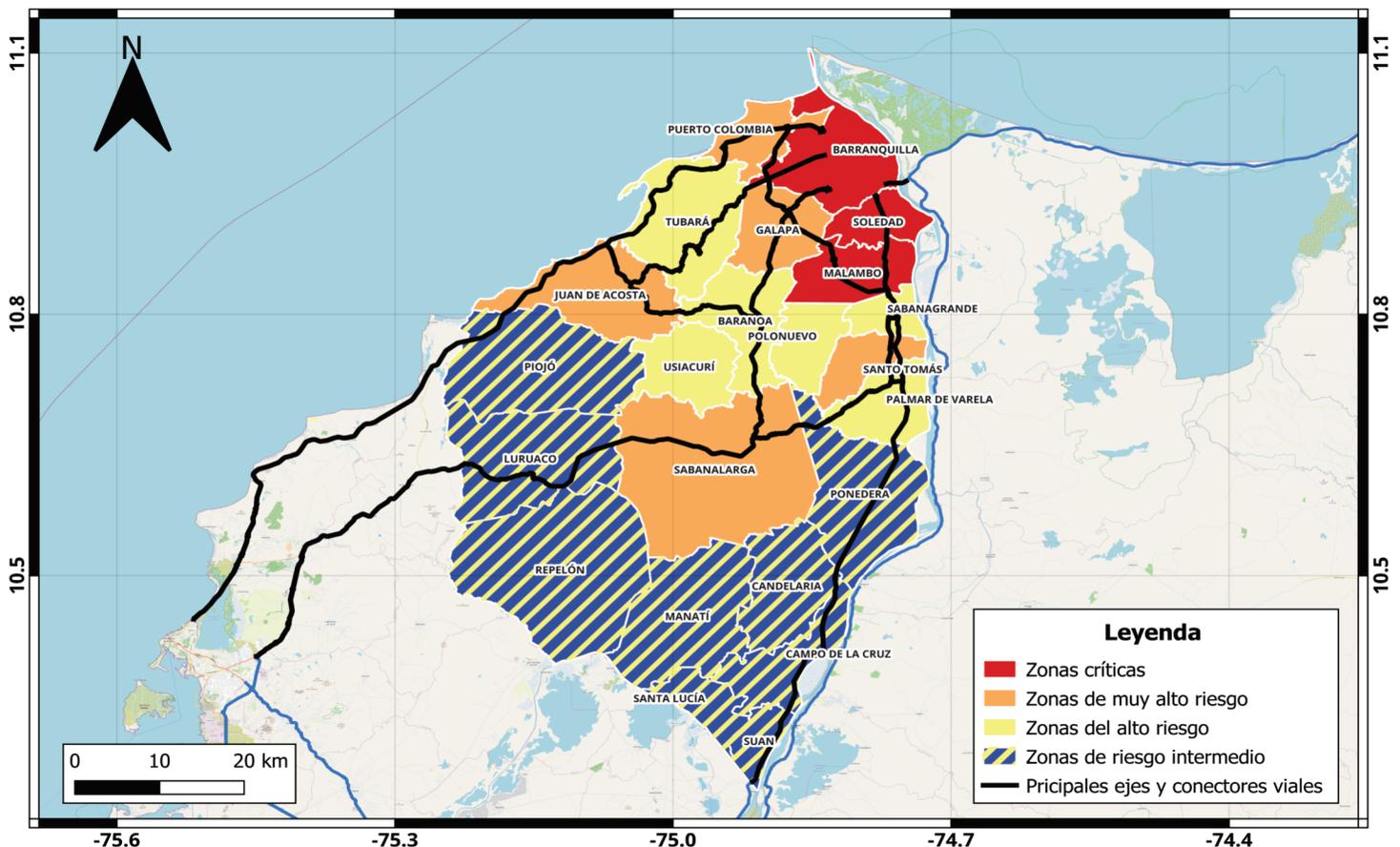


1. Panorama Regional y Local

•El cruento enfrentamiento entre organizaciones criminales persiste como el principal riesgo de gobernabilidad territorial.

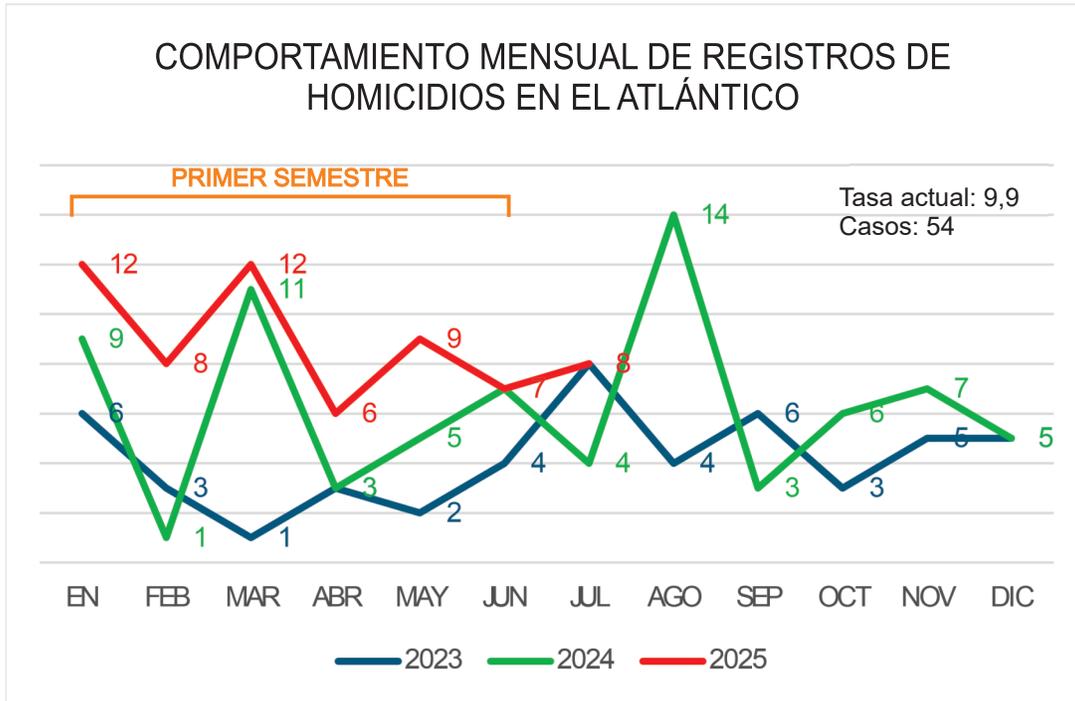
•En el primer semestre del año los homicidios intencionales en Barranquilla, su Área Metropolitana y el Departamento del Atlántico se encuentran mayormente relacionados con acciones de avasallamiento criminal entre grupos que no han logrado conseguir hegemonía sobre el territorio, las rentas y economías ilícitas.

•Podría afirmarse que el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, como centros estratégicos del Caribe Colombiano, gravitan alrededor de estas guerras horizontales a nivel regional y reciben influencia armada y violenta de dinámicas de macro-criminalidad que no necesariamente tienen origen en su jurisdicción.

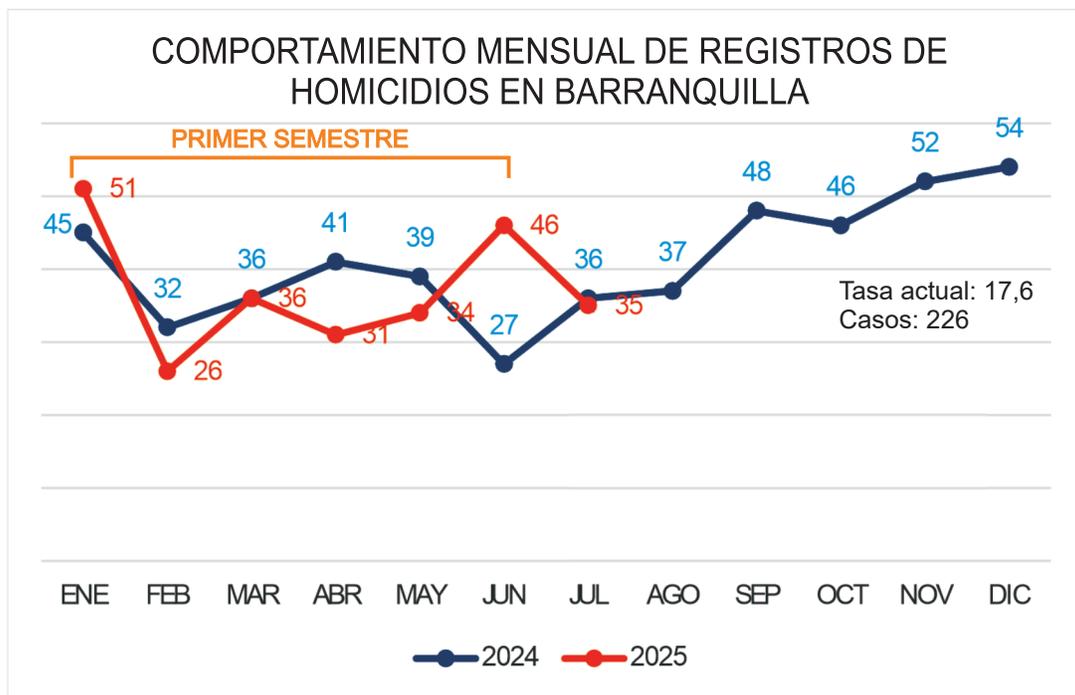


•Al comparar el primer semestre del 2025, con el primer semestre del año anterior, se evidencia que el aumento de los homicidios intencionales bajo la jurisdicción de la Gobernación del Atlántico fue del 50%, mientras que el aumento para el Distrito de Barranquilla fue del 2%.

1. Panorama Regional y Local



Fuente SIDCO (2025)

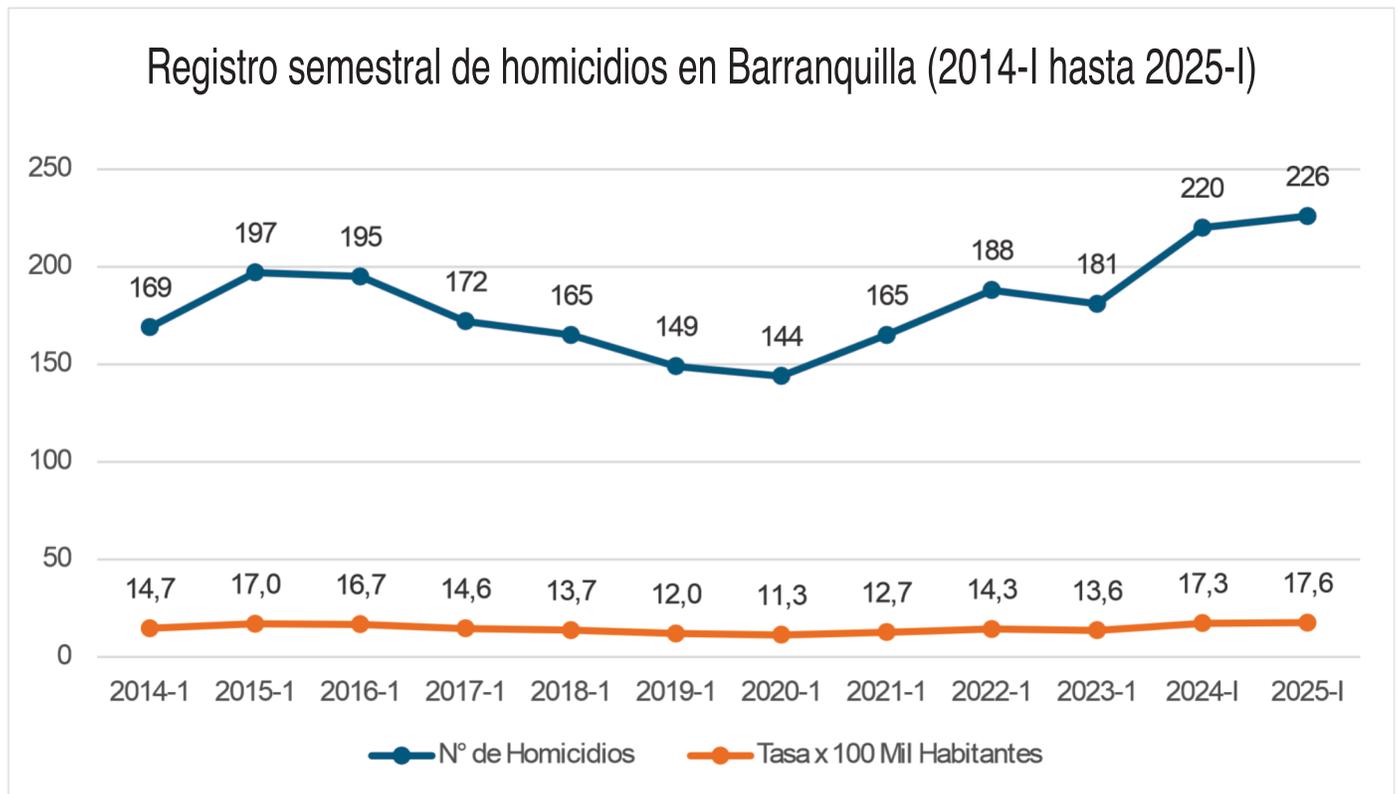


Fuente SIDCO (2025)



2. Contexto Estratégico

- El cierre del primer semestre del 2025 registró en el distrito de Barranquilla una tasa de homicidios de 17.6, la mas alta desde 2014-I
- La extorsión se mantiene como uno de los principales desafíos al crecimiento económico y está relacionada con la operación de financiamiento a la que acuden grupos de crimen organizado.
- El Gobierno nacional manifestó su intereses por establecer una mesa de dialogo socio jurídico en el marco de su agenda de paz total con las estructuras criminales de “Los Pepes” y “Los Costeños” en aras de “pacificar” Barranquilla y el Atlántico.



Fuente SIDCO (2025)



2. Contexto Estratégico

- El Comando de la Policía del Departamento del Atlántico (DEATA) en Sabanalarga, no se encuentra plenamente operativo en todas sus capacidades pese a la realización de una ceremonia de entrega protocolaria en Junio de 2024. Sin embargo, la obra haya sido recibida a satisfacción por el Ministerio del Interior y la propia Dirección Nacional de la Policía.
- Entre Noviembre de 2024 y Julio de 2025, se han realizado 2 atentados contra el gerente de la empresa Riverport en inmediaciones del corredor portuario de Barranquilla, en lo que las autoridades han calificado como acciones de presión extorsiva por parte de la organización “Los Pepes”.
- En Abril de 2025 se produjo un golpe estratégico por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla contra el Clan del Golfo en el que se dio la incautación de un importante arsenal con fusiles, pistolas, dinero y drogas en una vivienda al norte de la ciudad de Barranquilla.
- En Julio de 2025 se replicó un contundente golpe a la estructura criminal de las ACSN (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) demostrando capacidades de inteligencia y anticipación estratégica.
- Entre las medidas para combatir el crimen transnacional, se destaca el anuncio hecho por la Alcaldía de Barranquilla para el establecimiento de una sede de Interpol en la ciudad.
- El Director de la Sección Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, anunció un proyecto de más de 70.000 millones con el que se procura integrar mayor información de inteligencia e investigación criminal de todas las entidades relacionadas con el tráfico de drogas, con el fin de fortalecer la lucha contra el narcotráfico internacional.



3. La Paz Total en Colombia y su incidencia en la seguridad urbana.

La decisión del Gobierno nacional de adelantar negociaciones simultáneas con diferentes grupos armados al margen de la ley ha generado incertidumbre en la agenda pública, dados los alcances y los requerimientos de una implementación ágil y exitosa de estos diálogos.

El desorden metodológico en la estructuración formal de los procesos, los impases en la gestión política asociada con estos (especialmente el marco normativo de sometimiento a la justicia) y la falta de recursos a nivel fiscal y presupuestario para su eventual implementación han generado dudas sobre las probabilidades de éxito de estas iniciativas en el marco de las capacidades de orientación estratégica, posicionamiento político y coordinación interna del Gobierno.

Para el Gobierno nacional, la agenda de paz siempre tuvo unas prioridades claras que apuntaban al ámbito de inherencia rural de los grupos armados organizados (GAO), en especial de las guerrillas llamadas “disidencias de las FARC” y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y no necesariamente con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), por ser considerado esencialmente como un grupo paramilitar.

En este sentido, el enfoque urbano hacia grupos delincuenciales comunes organizados (GDCO) ha quedado rezagado a un segundo plano, de modo que las mesas de diálogo sociojurídico establecidas en Medellín, Quibdó y Buenaventura son ruedas sueltas con resultados muy disimiles en indicadores de violencia, producto de las falencias metodológicas, normativas y presupuestales del Gobierno nacional.

Estas mesas subsisten más por el interés de los actores criminales que por mérito del Gobierno mismo. En este sentido, tal como se explica en el siguiente apartado, la eventual apertura de una mesa de diálogo sociojurídico en Barranquilla y el Atlántico parece no contar con el interés prioritario del Gobierno, en especial en el marco de las llamadas ciudades capitales de oposición, es decir, aquellas con gobiernos locales no alineados con el presidente Petro.



3. La Paz Total en Colombia y su incidencia en la seguridad urbana.

Uno de los efectos más discutidos en este panorama de fragmentación de la Paz Total está relacionado con la actuación de la fuerza pública en un contexto de incertidumbre. La falta de claridad sobre la dimensión normativa y operacional de la Paz Total ha llevado las operaciones militares y policiales a una zona gris que ha limitado gradualmente sus alcances y ha afectado sus capacidades de control territorial, contención del crimen organizado, disrupción de la violencia y gestión judicial.

Esto ha ocurrido tanto en zonas críticas de confrontación (Arauca, norte del Cauca, sur de Córdoba, sur del Cesar, Norte de Santander y bajo Cauca) como en zonas de transición (Jamundí y Vista Hermosa), donde las limitaciones operacionales han dado pie a demostraciones de fuerza de los grupos que ya están en proceso de negociación y al posicionamiento de actores criminales de distinto orden que buscan un lugar en las mesas de diálogo.

Entre los impactos indirectos de este panorama cabe considerar, en primer lugar, la reducción del margen de oportunidad de la fuerza pública para adelantar acciones de disuasión, control territorial y respuesta a incidentes armados, lo cual facilita el fortalecimiento de actores consolidados y la apertura de frentes de confrontación en territorios en disputa.

En segundo lugar, se encuentra el riesgo palpable de que esta escalada de violencia penetre al ámbito urbano mediante acciones terroristas, como instrumento de presión de actores armados y criminales en su proceso de consolidación y posicionamiento. Al cierre de 2024, la situación de orden público y seguridad ciudadana a nivel nacional ilustró una dinámica preocupante. De acuerdo con un informe presentado por la Defensoría del Pueblo (2024), se registró un incremento respecto a la presencia territorial de estructuras de disidencias de las FARC-EP, el ELN y de grupos de crimen organizado en los municipios del país.



3. La Paz Total en Colombia y su incidencia en la seguridad urbana.

Con respecto a la incidencia de grupos de crimen organizado y su impacto en la seguridad ciudadana en entornos urbanos, es importante señalar que, durante el desarrollo de las mesas sociojurídicas (en Medellín, Quibdó y Buenaventura), los bajos indicadores de homicidios intencionales en estas ciudades donde imperan grupos criminales que no tienen reclamaciones políticas, cuya actividad está expresamente relacionada con el narcotráfico y el ejercicio de control territorial y político de las comunidades en sus áreas de influencia, no refleja necesariamente un fortalecimiento de las capacidades estatales para combatirlos, ni tampoco de la oferta institucional en esos territorios para atender necesidades insatisfechas dinamizadoras de violencia.

Los indicadores de violencia homicida intencional, tomados por separado, no permiten hacer una lectura integral de la situación de seguridad o la presencia de estructuras criminales en una zona. Esto en virtud de que la violencia no es la principal actividad de una organización criminal, y aquella en sí misma tampoco genera necesariamente riqueza. Por lo tanto, su empleo se explica mejor como un medio para controlar territorios, regular la vida social y administrar las actividades económicas legales o ilegales en las que participan esas estructuras.

En tal virtud, la disminución de los homicidios intencionales puede ser entendida como el efecto de un control social que, en clave racional, busca mantener bajos los indicadores de violencia, para que puedan ser presentados como elementos favorables que incidan en la validación de la mesa de negociación. Si tomamos como ejemplo el caso de Medellín, es necesario resaltar que el homicidio fue el principal desafío a la gobernabilidad durante la década de los noventa, y que, desde entonces, sus registros anualizados se han ido reduciendo de manera progresiva.



3. La Paz Total en Colombia y su incidencia en la seguridad urbana.

Sin embargo, ello no señala necesariamente una disminución de las capacidades operativas de estas estructuras criminales en la ciudad. Mientras el homicidio se reducía, las extorsiones y el desplazamiento forzado intraurbano aumentaban, en la medida en que las estructuras criminales habían encontrado formas más efectivas pero sutiles de ejercer control sobre las comunidades.

En términos generales, la Paz Total cambió la dinámica histórica de las negociaciones de fin del conflicto armado en Colombia, que se soportaban en aspectos fundamentales. Respecto a ese cambio, por una parte, está la desmovilización a cambio de beneficios jurídicos y económicos.

En segundo lugar, se contempla el desarme a cambio de la construcción o consolidación de las instituciones públicas locales por medio de planes, programas o políticas públicas de desarrollo territorial.



4. Fisuras de la Paz Total en Barranquilla y el Atlántico

En el 2023 se abrió la agenda y se anunció la instalación de mesas de negociación, con la promesa de silenciar los fusiles y conseguir la tan anhelada Paz Total en Colombia. Sin embargo, su situación actual no ha permitido ver grandes avances y resultados concretos en este sentido a nivel nacional, y su desarrollo ha tenido complejos efectos colaterales en varias zonas del país, incluyendo el Caribe colombiano, específicamente el distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico.

Si bien ni Barranquilla ni el Atlántico son zonas de producción cocalera, su ubicación las proyecta como centros logísticos, financieros y estratégicos de estructuras criminales ligadas a la industria del narcotráfico. Su interconexión vial —a través de carreteras nacionales como la Troncal de Occidente, la Troncal del Caribe y la Transversal de Contenedores— permite a su vez que se conecten con otros departamentos del Caribe, ciudades capitales a nivel nacional, pasos fronterizos como el puente de Rumichaca (en la frontera con Ecuador) o Paraguachón (en la frontera con Venezuela), y que sirvan de bisagra entre zonas aledañas a la producción cocalera en el Caribe colombiano.

Barranquilla

‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ estarían buscando mesa de diálogo con el Gobierno, en Barranquilla

En la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, reposa una solicitud promovida por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino.





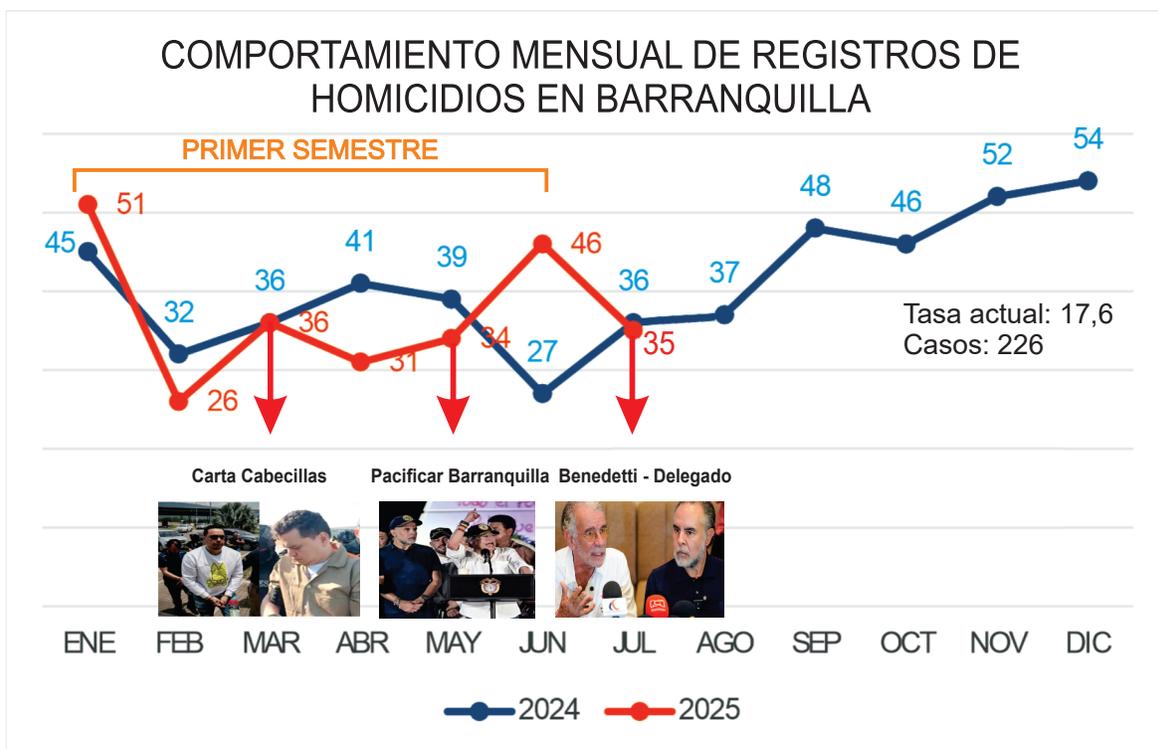
4. Fisuras de la Paz Total en Barranquilla y el Atlántico

Esto quiere decir que los altos indicadores de violencia homicida están asociados a un contexto de reorganización y disputa entre estructuras criminales. Hasta el momento, ninguna de ellas ha logrado establecerse como la fuerza dominante en el mundo criminal local. Una vez alguna de las partes de esta depredación criminal haya logrado proyectar hegemonía y conseguido sus objetivos estratégicos, es muy factible que la violencia homicida se reduzca ostensiblemente, pero ello no significa por añadidura el debilitamiento de las estructuras criminales o el fortalecimiento de las instituciones estatales y el imperio de la ley.

Adicionalmente, esta circunstancia abre las puertas a un debate sobre las capacidades y responsabilidades del resorte de los autoridades del orden local, departamental y nacional, es decir, aquellas en las que se requiere necesariamente del compromiso y la voluntad de apoyo de las capacidades del nivel central. Por ejemplo, al abrir o no la posibilidad de iniciar nuevas mesas de diálogo sociojurídico en Barranquilla y el Atlántico, o al combatir diferentes gao que tienen presencia local y a lo largo y ancho del territorio nacional, con un amplio repertorio criminal, y que constituyen amenazas suprarregionales que están por encima de las capacidades y recursos de un ente territorial.

Jorge Elicer Díaz Collazos, conocido como alias “Castor”, y Digno Palomino, máximos cabecillas de las estructuras criminales de Los Costeños y Los Pepes, enviaron una solicitud al alto comisionado de paz, Otty Patiño, manifestando su interés de que sea considerada la apertura de una mesa de diálogo sociojurídico en Barranquilla.

La respuesta no se dio a través de un comunicado, texto o declaración oficial. Simplemente se dio a conocer mediante un intercambio de mensajes informales con algunos periodistas y medios de comunicación, en los cuales prácticamente se le daba un “portazo” a esta eventual mesa de diálogo al manifestar que, desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz, se podría simplemente “coadyuvar en el proceso de acogimiento a la justicia de estas estructuras”.



Fuente SIDCO (2025)

5. Análisis de Prospectivas

- Persiste la incertidumbre metodológica, normativa y presupuestal sobre las condiciones de sometimiento de estructuras criminales. Es importante plantear la discusión respecto a los indicadores de seguridad y la manera como estos permiten tener herramientas para realizar un análisis integral y, con la consideración de otras variables, lograr una lectura amplia de la situación de seguridad en un territorio particular
- El homicidio intencional se consolida como instrumento de presión armada para condicionar la apertura de la mesa de diálogos socio jurídicos entre estructuras criminales el Gobierno nacional, muy probablemente en el último trimestre del año en curso.
- Una vez instalada, los argumentos para justificar la mesa de dialogo socio jurídico en Barranquilla estarían asociados con una eventual reducción de homicidios frente al año anterior. Sin embargo, la reducción ostensible de los registros de homicidios intencionales puede motivar percepciones erróneas con respecto al estado de las dinámicas criminales, el control de estas organizaciones sobre el territorio y la población, y la regulación de aspectos sociales y económicos tanto legales e ilegales en que participan tales estructuras.
- El apaciguamiento armado e impuesto por estructuras criminales para mantener bajas las cifras de homicidio intencional ilustra al menos dos dilemas de análisis. Primero, el carácter temporal de dicho apaciguamiento y, que beneficia a ambas partes (Gobierno y estructuras criminales) mientras duran las mesas de negociación. Sin un marco normativo que regule estas negociaciones y ante la imposibilidad de alcanzar sus objetivos maximalistas, estas mesas corren el riesgo de colapsar y con ellas el apaciguamiento. Segundo, la disminución de los homicidios intencionales no representa un desarme o desmovilización de estas estructuras criminales *per se*. Podrían disimular el acumulamiento de capacidades operativas y financieras de estas organizaciones durante los años/meses en que se han desarrollado las mesas de negociación.
- Combatir el crimen organizado en escenarios de macrocriminalidad requiere una adecuada articulación de las autoridades locales y nacionales, con miras a fortalecer integralmente, entre otras cosas, la cadena de investigación judicial para desarticular estas estructuras, capturar a sus cabecillas, quebrar el ciclo de sucesión criminal y golpear sus finanzas y capacidad operativa. Mientras no se reconozca desde lo nacional la importancia de Barranquilla como centro estratégico del Caribe colombiano y su relevancia para impactar en la estabilización de indicadores en esta zona del país, el escenario en prospectiva seguirá siendo complejo.
- La eventual apertura de una mesa de diálogos socio jurídico en el último trimestre del año en curso con estas estructuras podría venir apalancado por la designación de sus principales cabecillas como gestores de paz y su posible traslado a centros penitenciarios mas cercanos a la región. Estas acciones son posibles dentro del marco normativo vigente.
- Finalmente, el proceso despierta incógnitas respecto al papel que podría jugar estas estructuras criminales en los territorios y las poblaciones sobre las cuales ejercen control, especialmente en la etapa previa a la contienda electoral de 2026 y donde Barranquilla y el Atlántico fueron importantes fortines políticos que ayudaron a materializar las aspiraciones del entonces candidato Gustavo Petro.